

SURGIMIENTO DE UN SENTIMIENTO INDEPENDENTISTA EN FILIPINAS EN EL SIGLO XIX

Annick Tranvaux

En el proceso de independización de las Islas Filipinas en el siglo XIX, llaman particularmente la atención la brevedad del período revolucionario, así como lo tardío de su iniciación, sobre todo si se compara la situación filipina con lo acaecido en las otras colonias españolas durante el mismo siglo.

Un cuestionamiento de la presencia española había surgido, por supuesto, mucho antes, en determinados sectores de la población, y hemos de buscar tiempo atrás las raíces de una aspiración independentista, sin que ésta hubiera supuesto, en un principio, el recurso a la lucha armada. Aún teniendo en cuenta una serie de sublevaciones, como la de Cavite, en 1872, rápidamente sofocadas, y de las que no consideraremos aquí sino las más notables, una calma relativa parece haber reinado en el Archipiélago hasta el último decenio del siglo XIX, según manifestaban los sucesivos informes de los Gobernadores Generales.

A pesar de no haber puesto en auténtico peligro la presencia española en las islas, no faltaron, a la largo de los siglos, movimientos de protesta, más o menos importantes, y cuyos motivos fueron muy variados. Así, en el siglo XVIII, la rebelión de Francisco Dagohoy, que se refugió en el monte con sus partidarios, viviendo éstos y sus descendientes durante casi un siglo en una libertad de hecho, fue provocada por un violento desacuerdo con el cura de su pueblo, habiéndose negado éste a enterrar cristianamente al hermano de Dagohoy, muerto en duelo. Después de matar al cura, se había refugiado en el monte, donde vivió con sus partidarios, a partir de 1744, en autarcia, y después de algunas escaramuzas, no se preocuparon realmente las autoridades de acabar rápidamente con dicha situación y tardaron casi un siglo en mandar unas expediciones decisivas que recogieron, en 1829, el sometimiento de los descendientes de los rebeldes.

Mucho más serios podían haber sido los acontecimientos de 1762. En efecto, la ocupación inglesa representaba una ocasión inesperada para los filipinos de librarse de la soberanía española. Así lo entendieron los chinos, que ofrecieron sus servicios a los ingleses. Los españoles pudieron acabar, sin embargo, con una insurrección de 5.000 chinos en la Pampanga y Manila, no sin la ayuda de las tropas indígenas. Hubo también filipinos que, aprovechando las circunstancias favorables, se levantaron contra España, aunque la mayoría dió muestras de su fidelidad. Resulta tanto más notable cuanto que la actitud de los propios españoles frente a la autoridad inglesa no podía menos de crear cierta perplejidad entre los filipinos. No faltaba entre los peninsulares quienes dudaban de la oportunidad de resisitir al invasor, emprendiendo algunos una política de franca colaboración,

cuando la capitulación de las autoridades españolas había creado ya de por sí cierta confusión.

No es de extrañar, por consiguiente, que coincidieran con aquellos acontecimientos varios movimientos, como los de Diego Silang o Juan de la Cruz Palaris. El primero, sin embargo, empezó tratando de encabezar un movimiento de resistencia al invasor, en nombre de España y de Cristo Rey. La desconfianza del Gobernador Simón de Anda y Salázar lo llevó a unirse con los ingleses, atacándose entonces a los religiosos españoles. Después de su asesinato, en 1763, la lucha que continuaron su viuda y su tía acabó a los pocos meses con la ejecución de aquélla con un centenar de partidarios. La sorprendente trayectoria de Diego Silang es reveladora de la confusión que reinaba tanto entre españoles, como entre filipinos.

El 3 de noviembre de 1762, Juan de la Cruz Palaris encabezó un levantamiento, inicialmente provocado por los abusos y la venalidad de las autoridades de su pueblo. Aunque fue rápidamente capturado, se le unieron varios pueblos, y sólo en 1766 se rindieron sus últimos partidarios. A pesar de la actitud, en su mayoría, fiel a la corona que mantuvieron los filipinos en las circunstancias difíciles de la ocupación inglesa, se pudo entonces observar que una rebelión localizada podía reunir en breve tiempo un número de partidarios suficiente para resultar preocupante para el gobierno español. Por entonces, contaba el ejército con menos de 10.000 hombres, de los que el 90% eran filipinos, provistos muchos de ellos de un armamento rudimentario. Es difícil medir las consecuencias exactas a más largo plazo de la curiosa situación política vivida por los filipinos durante los dos años de la ocupación inglesa. Devuelto el Archipiélago a la soberanía española, no se observó, después de la retirada británica, ninguna agitación antiespañola inacostumbrada. Es difícil, sin embargo, suponer que semejante experiencia no haya sembrado la duda entre los filipinos. Tanto la derrota de los españoles, la primera desde la conquista, como su calamitosa división frente al invasor, debían lógicamente contribuir al desprestigio del “castila”.

La primera revuelta notable de la primera mitad del siglo XIX, fue provocada por la epidemia de cólera de 1820,¹ en la que fueron asesinados por la población filipina 28 extranjeros, europeos o americanos, así como residentes chinos, cuyas tiendas fueron saqueadas el segundo día de disturbios, por haberse difundido el rumor de que habían envenenado los extranjeros el agua de los pozos. La revuelta no iba dirigida contra la soberanía española y las circunstancias de esas violencias resultaban bastante clásicas: una población, enfrentada con una situación dramática y angustiadora, volvía su furor contra aquéllos que la voz pública hacía responsables de su desgracia. Del mismo modo, el pueblo de Madrid, durante la epidemia de cólera de 1836, asaltó varios conventos, asesinando a un centenar de religiosos, particularmente jesuitas, por haber corrido la voz de que habían envenenado las fuentes públicas.

Más inquietante para la soberanía española, podía haber resultado el motín encabezado, en 1823, por el Capitán Novales y el Teniente Ruiz. Quedó sofocado en menos de 26 horas pero dio lugar a incidentes particularmente graves, ya que el antiguo Gobernador General, don Mariano Fernández de Folgueras, que aseguraba la interinidad mientras llegaba el nuevo Gobernador, murió asesinado por Ruiz.²

Se notaba cierto descontento entre los oficiales criollos y mejicanos. Había sido necesario sustituir a éstos después de la independencia de su país. Llegaron nuevos oficiales peninsulares, que beneficiaban de condiciones más favorables que las consentidas a los criollos y a los mejicanos, que aún no habían regresado a América. Al tener noticia de lo que se preparaba, el gobierno había adoptado medidas preventivas, arrestando y mandando a España a los principales responsables. No se había podido demostrar nada concreto contra Novales, y para alejarlo se le confió una misión de pacificación en Mindanao. El mismo día de su embarque, se volvió a Manila, apoderándose durante la noche de las puertas de la ciudad, mientras Ruiz investía la Real Fuerza de Santiago, uniéndosele unos 800 hombres.

El médico francés Pierre de la Gironière, cirujano del regimiento de Novales, pudo darse cuenta de que éste, la mañana misma de su salida para Mindoro, se mostraba profundamente resentido de las sospechas que en él habían recaído. La encuesta de la que había sido objeto a propósito de eventuales maniobras separatistas le habían irritado profundamente: “...Novales vino a verme, y después de quejarse amargamente de la injusticia del Gobierno, añadió que se arrepentirían de haber desconfiado de su honor, y que no tardaría en volver”.³ Novales había vuelto, efectivamente, aquella misma noche, y, con todos los oficiales criollos, se había apoderado de las puertas de Manila. Mientras tanto, Ruiz, después de apuñalar a Folgueras y de apoderarse de las llaves de la ciudad, había liberado a los detenidos, encerrando en su lugar a los principales funcionarios del Gobierno. Después de tres horas de un combate encarnizado, fueron vencidos los insurrectos. Novales fue el primero en ser juzgado y sentenciado de muerte por el tribunal de guerra inmediatamente reunido. Pierre de la Gironière resumía así el destino del oficial criollo: “a la medianoche, estaba proscrito, a las dos de la mañana proclamado emperador; y a las cinco de la tarde, fusilado por detrás”.⁴

Aunque el descontento inicial provenía de una diferencia de tratamiento entre oficiales peninsulares y criollos, y aunque la rebelión fue rápidamente sofocada, y no parece haber conocido más prolongamientos, este motín presentaba un carácter particular, por el origen de los rebeldes. Los instigadores fueron mejicanos y criollos. Estos, aunque no formaban un grupo numéricamente importante en Filipinas, y tampoco tenían un peso económico comparable al de los criollos de América, constituían sin embargo el primer grupo social nativo de Filipinas en beneficiar de un nivel social y cultural que podía justificar que aspirara a desempeñar en el Archipiélago un papel más importante. Frustradas sus aspiraciones en beneficio de peninsulares, era inevitable cierto resentimiento. El movimiento independentista de fin de siglo había de ser más bien filipino, pero es interesante observar este cuestionamiento de la legitimidad de los españoles peninsulares por los criollos desde los años veinte.

La ambición del Capitán Novales, que se había proclamado emperador de las Filipinas, era acapararse el poder de los peninsulares. Podemos suponer que el contexto de independencias americanas no fue del todo ajeno a la concepción de semejante proyecto. Sin duda, esta insurrección quedó sofocada en pocas horas, pero el reducido número de españoles en general, y aún más de peninsulares en una época en que muchos funcionarios y militares eran mejicanos, permite pensar que no era irrealista la tentativa de Novales, y

apareció con evidencia la extrema fragilidad del poder español en Filipinas. Sólo la lealtad de los regimientos indígenas permitió dominar la situación aunque, de haber tenido mayor éxito la empresa, podemos dudar de su viabilidad a largo plazo.

También se podían observar en el Archipiélago esporádicos focos de agitación, sin demasiadas consecuencias, que solían reunir grupos de descontentos alrededor de un individuo, cuyo discurso de tipo mesiánico solía entremezclar reivindicaciones diversas y consideraciones religiosas. Las autoridades solían dominar la situación sin demasiada dificultad. Uno de esos movimientos, sin embargo, la Cofradía de San José, de Apolinario de la Cruz había llegado a tener tal amplitud que el Gobernador General había tenido que mandar el ejército para acabar con los fieles de Apolinario.⁵ Este había fundado la Cofradía en 1832. La actividad de sus miembros consistía en reunirse para rezar y para oír misa el 19 de cada mes. El tesorero era un clérigo filipino, el padre Ciriaco de los Santos. La gran cantidad de miembros que llegó a tener la Cofradía empezó a preocupar a las autoridades. En 1841, unas 2.500 personas se reunieron con armas por temer una intervención de las autoridades, para una ceremonia religiosa en Igsaban, provincia de Tayabas. Resistieron por la fuerza a la orden de dispersión del Gobernador de la provincia, muriendo éste en la lucha. El Gobernador General, Marcelino Oraá, mandó la tropa y, preso Apolinario, fue sentenciado de muerte y ejecutado, junto con los principales jefes de la Cofradía. Sin embargo, en España, consultado el Tribunal Supremo, éste desaprobó la actitud del Gobernador General, arguyendo que nada demostraba que las actividades de la Cofradía no fuesen estrictamente religiosas, en cuyo caso sólo podían haber intervenido las autoridades eclesiásticas.⁶ No deja, sin embargo de ser controvertida la naturaleza de ese movimiento, del que se pudo observar un resurgimiento en 1870⁷... Apolinario de la Cruz, “Hermano Pule” precursor para unos de la causa independentista, y uno de sus primeros mártires, y para otros, jefe espiritual de un movimiento de mera exaltación religiosa,⁸ había proclamado que los indios ya no pagarían tributo. Sus partidarios le llamaban “Rey de las Tagalos”. Teniendo en cuenta la cantidad de gente reunida, y la resistencia ofrecida a la orden de dispersión de las autoridades, la situación no podía menos de alarmar a los españoles. No podemos descartar que, viéndose rodeado de un número inesperado de simpatizantes, Apolinario haya abandonado un propósito inicial de carácter estrictamente religioso por otro de carácter más político. Cualquiera que fuesen sus intenciones reales, llegó a representar un símbolo de la lucha por la independencia tagala.

Otro movimiento iba a ser objeto de controversias. El motín que estalló en la noche del 20 al 21 de enero de 1872, en el Arsenal de Cavite⁹, fue rápidamente dominado el día 22 por la mañana, y duró menos de 48 horas, causando 20 muertos y 54 heridos entre las fuerzas del Gobierno. La rapidez con la que quedó circunscrita la rebelión y el aspecto corporatista de la reivindicación inicial dejarían pensar en un movimiento localmente circunscrito. Se sospechó sin embargo una conspiración separatista, y los arrestos a los que se procedió después de terminada la lucha, y sobre todo la ejecución de tres sacerdotes filipinos, habían de convertir, cualquiera que fuese la realidad de la conspiración, aquel motín en símbolo de la causa independentista.

La supresión, a partir del primero de enero de 1872 de las ventajas fiscales, exención del tributo y de la prestación personal, de las que venían beneficiando los obreros del

arsenal de Cavite, provocó un gran descontento. Una conspiración en la que participaban también oficiales y empleados civiles españoles, proyectó apoderarse de la Real Fuerza de Santiago, y luego de Cavite. Los primeros combates tuvieron lugar en Cavite, en la noche del 20 al 21, permitiendo la legalidad del ejército indígena acabar con los insurgentes. Fueron traídos a Manila, y juzgados inmediatamente, 71 prisioneros. De los 41 condenados a muerte, 13 fueron efectivamente ejecutados.

Si la reacción del Gobierno se hubiese limitado a esas sentencias, es posible que el alzamiento de Cavite no hubiese dejado huella tan profunda en la memoria colectiva del pueblo filipino. Pero el Gobernador había mandado arrestar también y llevar a la Real Fuerza de Santiago, a unos filipinos sospechosos de complicidad con la insurrección. Entre ellos, el padre José Burgos y otros clérigos. Un mes más tarde, se procedió a nuevos arrestos. Entre los detenidos muchos médicos, abogados, cleros, profesores, empleados del Gobierno. Dicho de otra manera, miembros de la burguesía filipina y de la clase ilustrada. A pesar de no ser competente el tribunal militar para juzgar a civiles, 26 de ellos fueron desterrados a las Islas Marianas.¹⁰ Pero, sobre todo, se había juzgado, el 15 de febrero, a tres sacerdotes filipinos, los padres José Burgos, Mariano Gómez¹¹, y Jacinto Zamora, la sentencia de muerte por garrote vil dictaminada contra estos clérigos se había cumplido el día 17 y la ejecución de los tres sacerdotes provocó viva emoción. El más conocido era el padre José Burgos, un mestizo, hijo de un militar español y de una filipina. Con treinta años, y después de brillantes estudios, ya ocupaba cargos importantes¹² y le esperaba una prometedora carrera. También se había convertido, después de la muerte del padre Pedro Peláez, en portavoz de la causa del clero nativo. El arzobispo, monseñor Gregorio Melitón Martínez, que no pudo disponer de los expedientes auténticos del proceso, se negó a aplicar la degradación canónica reclamada por el Gobernador.

La rebelión de Cavite y la represión que siguió se increíban dentro de un contexto político marcado por la supresión de los avances liberales recientemente conseguidos. En 1869, el nuevo Gobernador Carlos María de la Torre había introducido una serie de medidas liberales, de acuerdo con los cambios intervenidos en la Península después de la revolución de 1868: abrogación de la censura, libertad de expresión, libertad de prensa. Los medios conservadores y las órdenes religiosas ofrecieron fuerte resistencia, sobre todo cuando se trató en 1870 de secularizar la enseñanza, teniendo que renunciarse a la aplicación inmediata de esa medida. En 1871, el nuevo Gobernador General, Rafael de Izquierdo restablecía los estatutos en vigor en el Archipiélago antes de 1869, provocando el descontento de gran parte de la población. Coincidió también ese período con la apertura del Canal de Suez que facilitó los contactos con la metrópoli y la circulación de las nuevas ideas, que provocaron cierta efervescencia en la burguesía filipina, cuya prosperidad se veía favorecida por la liberalización del comercio. Surgían nuevas ideas de emancipación. Aún no se reclamaba la independencia, pero la acción del Gobierno se criticaba. El motín de Cavite, si más bien parece un levantamiento localizado que un principio de insurrección independentista, permitió al Gobierno arrestar a los elementos más agitados. La causa independentista no iba a tomar la senda de las armas antes de 1896. Es indudable, sin embargo, que durante los tres últimos decenios de la presencia española, los acontecimientos de Cavite tuvieron para los patriotas filipinos valor de símbolo y de referencia. Al ejecutar a tres sacerdotes filipinos, después de un proceso dudoso,¹³ el poder español había ofrecido al nacionalismo filipino sus primeros mártires.

No se recurriría realmente a la lucha armada, sin embargo, hasta los últimos años del siglo XIX, y aparte de las campañas contra las partidas de *tulisanes*¹⁴ - que representaron una preocupación constante para las fuerzas del orden, sin que se llegara sin embargo a considerarlas como auténtica amenaza para la paz pública - el mantenimiento del orden en las Islas no parece haber planteado mayores problemas a las autoridades españolas hasta estallar la revolución. Lo atestiguan los informes de los Gobernadores Generales, así como una serie de observaciones que tienden a confirmar que, hasta el último decenio de la presencia española, reinaba la paz civil en el Archipiélago.

Dos años antes de la rebelión de Cavite, el Gobernador General Carlos María de la Torre, en una carta dirigida al Ministro de Ultramar, en 1870,¹⁵ señalaba que cierta atmósfera antiespañola se iba haciendo perceptible en algunos medios, pero no manifestaba reales inquietudes en cuanto a la situación general del país. Los motivos de descontento se relacionaban en gran parte, según el Gobernador, con el sistema administrativo, abusos de las autoridades locales en el cobro del tributo o reparto de servicios. Sólo las clases ilustradas y el clero indígena le parecían susceptibles de crear eventuales problemas, aunque cierta impaciencia por parte de estas categorías sociales no le parecía justificar excesiva alarma. Las condiciones de una insurrección general no parecían pues reunidas en 1872 y, pocos días después de la insurrección de Cavite, el Gobernador General Rafael Izquierdo, en una carta del 2 de febrero de 1872,¹⁶ informaba al ministro de Ultramar de que habían vuelto la calma: “Tengo la satisfacción de manifestar a V.E. que el orden y la tranquilidad pública están asegurados, que abrigo la convicción profunda de que por ahora y quizás en mucho tiempo no han de alterarse ...”. Aunque no dejaba de reconocer que, en caso de serias perturbaciones, las fuerzas de que disponía hubieran resultado insuficientes para ofrecer eficaz resistencia.

Según comunicaba Izquierdo, a pesar de las esperanzas frustradas despertadas en Filipinas por la revolución del 68 en la Península, y de las vanas tentativas de los amotinados de Cavite por conseguir que se les unieran varios pueblos de la comarca, las ideas sediciosas parecían limitarse a algunos determinados sectores de la población. Se mantenía la paz pública con un ejército en su inmensa mayoría filipino, siendo la oficialía constituida esencialmente de peninsulares y no pasando éstos, sin embargo, de una proporción de 1 por 11 filipinos. A pesar de una relación de fuerzas tan desfavorable a los españoles, los diversos movimientos sediciosos que se habían dado a lo largo de los siglos siempre pudieron ser contenidos por la intervención del ejército indígena, que nunca había fallado.

Veinte años más tarde, el 14 de noviembre de 1892, sólo cuatro años antes de la insurrección, el Gobernador General Despujol informaba¹⁷ al Ministro de Ultramar de que unas sesenta pesquisas, organizadas de manera simultánea y por sorpresa en seis provincias distintas, en casa de familias sospechadas de filibusterismo, dieron escaso resultado. No se dio con armas y no se hallaron más escritos subversivos que algunos ejemplares de *La Solidaridad* y de las obras de Rizal. El interrogatorio de las personas sospechosas, pertenecientes en su mayoría a familias acomodadas e influyentes, dio también escaso resultado, a pesar de la cantidad de gente oída.

Si las simpatías por la causa autonomista no eran dudosas, nada atestiguaba la preparación de una subversión armada. De los interrogatorios, resultaba que se recogían fondos para el mantenimiento de los centros de Propaganda de Hong-Kong y de Madrid, mientras el de Manila lo iba coordinando todo. Pero no se podía demostrar la utilización a fines ilegales de dichas sumas, globalmente poco importantes. No se excluía la posibilidad de que algunas cantidades hubieran sido sustraídas, en beneficio propio, por alguno de los miembros. Se descubrió también la apertura de una serie de logias masónicas, sin poder demostrarse claramente su finalidad antipatriótica. El papel desempeñado por aquellas en la independencia de las colonias de América debía incitar a los españoles a la prudencia, comentaba Despujol que, por lo demás pensaba, como los Gobernadores de provincias consultados, que nada justificaba alarmarse por entonces, aunque convenía permanecer alerta: “Coinciden ¹⁸ en apreciar hoy por hoy el movimiento o la propaganda progresista como meramente platónica u holalatera y en considerar como dignas de represión las hoy pocas e incipientes logias masónicas, siendo el carácter más general y más perceptible de la presente propaganda el de ser antifrailera o sea dirigida contra el actual modo de ser de las Ordenes Religiosas, cuya antigua influencia, al decir de aquellas autoridades, va decreciendo”.¹⁹

Consultados los Gobernadores de provincias, se tomó la decisión de deportar a una o dos personas por provincia, sin que dicha decisión procediera de una auténtica convicción, sino de la preocupación de no dar a los interesados, después de las sistemáticas pesquisas llevadas a cabo, señales de debilidad. También había de manifestar muchas dudas el Gobernador General antes de decidir, ese mismo año,²⁰ la deportación de Rizal, al llegar éste de Hong-Kong y al encontrarse escritos subversivos en su equipaje.

Quizá fuera excesivo el optimismo de las autoridades españolas. Es cierto sin embargo que nada de lo encontrado anunciaba una próxima insurrección, a pesar de contar las personas interrogadas entre los sospechosos más notorios. Parece dudoso que no se encontrara nada en su domicilio en caso de haberse preparado realmente una inminente lucha armada. A lo sumo llegaron a encontrar un puñal y un sable en casa de uno, algunos cartuchos en casa de otro, lo que en definitiva se podía haber encontrado en casa de cualquier particular. Hasta las cartas de Rizal, embargadas durante la operación, no revelaban nada que fuera realmente inquietante para la seguridad de la nación.

Cabe, por supuesto, preguntarse si los informes de los Gobernadores Generales, siempre deseosos de subrayar la eficacia de su gobierno, presentaban la máxima garantía de objetividad - aunque una subestimación del peligro los podía haber colocado en una situación difícil. Sin embargo, un informe del belga Jules Greindl, amigo y consejero del rey Leopoldo II, viene a confirmar la ausencia de disturbios dignos de consideración, aún en 1870. El soberano belga, en efecto, proyectaba la compra de las Islas Filipinas a los españoles, en nombre propio, después de que su país hubiese desistido de una primera tentativa en los años 40, frente a la alarma de Gran Bretaña. Del fracaso de este segundo proyecto iba a surgir el del Congo belga.

Jules Greindi emprendió la redacción de un informe detallado de la situación filipina, en la que se examinaba cada elemento del presupuesto del Archipiélago, así como las posibles dificultades materiales y políticas con que se verían enfrentados los belgas, en

caso de realizarse la tractación, las inversiones necesarias y la posible rentabilidad de la empresa. Se hacía indispensable, por consiguiente, una evaluación lo más objetiva posible. Disturbios importantes del orden público hubiesen resultado disuasivos y hubiesen merecido, por parte del consejero, detenidos comentarios. A pesar de lo detallado del informe y de haber tratado de la situación del ejército y de la probable dificultad que hubiera representado la sustitución de oficiales españoles por oficiales belgas, Greindi en ningún momento aludía a particulares disturbios en el país ni a ninguna insurrección previsible contra la soberanía española. En cambio, concluía señalando que cualquier otro país que España, que hubiese querido mantenerse en Filipinas, hubiera tenido que incrementar notablemente el modestísimo presupuesto militar dedicado al Archipiélago por España que “gobierna con sus curas que valen más y salen más baratos que un ejército.”²¹

El fracaso del proyecto se debió, en definitiva, a las reticencias españolas por una parte, no pasando las negociaciones de tractación secreta, y por otra parte a la necesidad de importantes inversiones inmediatas, con una rentabilidad sólo a largo plazo. Aquéllas eran consideraciones puramente económicas. El informe de Greindi permite pensar que la tranquilidad pública, en 1870, no presentaba ningún problema particular que pesara en la decisión finalmente adoptada.

Otro dato viene a confortar la idea de que reinaba globalmente la paz en el Archipiélago, el de la reducida presencia española en las islas, desde los orígenes, y hasta los últimos años del siglo XIX.

Aparte de los religiosos, los peninsulares eran esencialmente funcionarios y militares, hombres jóvenes y solteros. Muy reducido era el número de familias que se establecían en Filipinas, donde nacían pocos niños españoles. Si nos referimos, por ejemplo, al segundo Cuaderno de la Comisión Central de Estadísticas de Filipinas, para el año 1855, de los 199 españoles europeos residentes en Binondo, sólo 32 eran mujeres, y los niños españoles menores de 14 años no pasaban de 2, mientras llegaban a un total de 7 en la ciudad de Manila.

El mismo año, el francés Pierre de la Gironière²², tomando como base el censo de 1845, indicaba un total de 4.050 “españoles y sus criollos”, para los que daba el siguiente reparto: 500 frailes y religiosos, 70 comerciantes, 200 terratenientes, 3.280 empleados de Gobierno; Intendencia de Marina, oficiales y suboficiales. Señalaba por otra parte la presencia de 8.584 mestizos hispanofilipinos. La población del Archipiélago se estimaba entonces a unos 3,5 Millones de habitantes.²³ Los españoles no representaban sino un 0,11% del total de almas, un 0,36% si incluimos a los mestizos. Dicho de otra manera, de cada 1.000 habitantes no llegaban a 4 españoles y mestizos.

A finales del siglo, aunque se podía observar una presencia española algo más importante, seguía muy limitada en proporción al número de habitantes de las islas: durante el último decenio, los españoles representaban menos del 2 por 1.000 de la población, no llegando al 3 por 1.000 con los españoles filipinos.²⁴

Aparte de la escasa presencia española en el Archipiélago, se podía observar un fenómeno de concentración del elemento peninsular en la ciudad y en la provincia de

Manila, quedando en muchos pueblos, como único español, el fraile párroco. En numerosos pueblos, y hasta provincias enteras, ni siquiera se daba esa mínima representación. Así, el boletín de estadísticas de la Ciudad de Manila, de 1820, señalaba para las islas de Luzón o Nueva Castilla, la presencia de 333 españoles europeos, de los cuales 296 residían en Manila. En muchas provincias, la presencia española, cuando la había, resultaba casi anecdótica: 6 españoles, por ejemplo, en Bulacán, todos en San Rafael, 5 en Ilocos Norte, todos en Bangui, 7 en Bataan, 7 en la Laguna de Bay, 7 en Batangas, 3 en Albay, 3 en Cebú...

A mediados del siglo, el reparto de la población española en el territorio muestra que seguían manifestando la misma repugnancia los europeos a instalarse en las provincias. En la estadísticas publicadas en 1855 por don Rafael Días Arenas,²⁵ éste insistía en lo permanente de dicha actitud por parte de sus compatriotas: “Los primitivos españoles que en un principio se establecieron en Cebú cuando Legaspi fundó la ciudad del Santo Niño, se vinieron a Manila después, atraídos por el comercio que reflujo todo aquí; y aunque se quisieron con el tiempo fundar ciudades de españoles en Vigán y otros puntos [...] no se consiguió vencer aquella repugnancia del español a separarse de los suyos, así es que han permanecido y permanecen todos avecinados en las inmediaciones de Manila, particularmente en el pueblo de Binondo que puede decirse es el centro de todo el comercio de las islas.”

Según estas mismas estadísticas, el total de la población española en provincias, sin contar la de Manila, no pasaba de 312 personas en 1848. En las 34 provincias consideradas, el número de españoles pasaba de los 10 individuos en sólo 9 provincias, no llegando la más fuerte concentración, la de Ilocos Sur, a las 100 personas. Siguiendo el reparto por orden decreciente, inmediatamente después de los 99 españoles de Ilocos Sur, observamos que sólo residían 27 en Zambales, 17 en Albay, mientras en 8 de las 34 provincias consideradas no se señalaba a ningún español.

La presencia de estos peninsulares era insuficiente para que los europeos pudieran formar un auténtico grupo social. Esto explica probablemente en parte que los filipinos la toleraran sin demasiados problemas, a pesar de una relativa ausencia de protección.

Pero, sobre todo, los datos referentes a la población española en el archipiélago tienden a confirmar la permanencia de la paz pública en las islas. Si no, ¿cómo imaginar razonablemente una dominación de más de tres siglos, con una presencia tan limitada del pueblo colonizador, de haberse dado mucho antes del 98 un decidido movimiento de emancipación?. Parece obvio que el reducido número de españoles, sobre todo en zonas de provincias, no hubiese resistido mucho tiempo a una situación insurreccional. Tampoco parece verosímil que tan corto número de españoles pudiera ejercer una opresión realmente violenta en la población filipina.

Si tardó en manifestarse hasta finales del siglo XIX un decidido movimiento armado de emancipación, las raíces de un progresivo descontento eran más antiguas, y una creciente impaciencia se venía observando por parte de algunos sectores de la población.

El clero filipino representó el primer elemento filipino cuya esperanzas se vieron frustradas. En el siglo XVIII, el Arzobispo Santa Justa y Rufina, ²⁶ había acelerado el acceso de jóvenes filipinos al sacerdocio, confiándoles parroquias, en su mayoría ocupadas antes por el clero regular español. Este se veía, por una parte enfrentado con la dificultad de atraer a nuevos frailes a Filipinas, y por otra parte, con la secularización de las parroquias emprendida por el Arzobispo Santa Justa y Rufina y el Gobernador Anda y Salazar, había tenido que abandonar muchos curatos. En los primeros decenios del siglo XIX, abandonando su política de secularización, volvió el Gobierno a favorecer la presencia de regulares en las parroquias y nuevos misioneros fueron llegando a Filipinas. Se entabló entonces una enconada lucha por la atribución de curatos entre clero regular y español y clero secular, en su casi totalidad compuesto de filipinos o mestizos. Este había sufrido, en tiempos de Santa Justa y Rufina, de la acelerada preparación recibida, valiéndole ésta muchas críticas. Probablemente algunas de ellas estuviesen justificadas, tratándose de una generación a la que no se pudo proporcionar una formación realmente adecuada, pero este prejuicio iba a durar, aún cuando el clero filipino contó en sus rangos con hombres ilustrados. A la largo del siglo XIX siguió aumentando el número de sacerdotes filipinos, pero la proporción de parroquias que administraban fue disminuyendo. Responsables de la mitad de las parroquias aproximadamente a principios de siglo, en 1898, contando el Archipiélago con un millar de frailes y unos 700 sacerdotes, ya no administraban éstos sino 158 curatos de los 967 existentes, es decir menos de la quinta parte,²⁷ quedando reducidos en los demás casos a la función de coadyutores. No sólo esta situación era duramente resentida por el clero por verse frustradas sus aspiraciones sino que se agudizó el sentimiento de injusticia cuando, por ejemplo, se atribuyó a regulares parroquias que siempre fueron administradas por seglares, y sobre todo cuando el regreso de los jesuitas²⁸ dio lugar a un nuevo reparto de los curatos. En 1861, los Recoletos cedieron a la Compañía de Jesús sus parroquias de Mindanao, viniendo luego a ocupar, en Manila, parroquias hasta entonces administradas por los seglares. No sólo se trataba de una grave injusticia cometida contra el clero secular, sino que los argumentos utilizados para justificar esta situación ofendían su dignidad: una parroquia se suponía peor administrada por un clérigo, por ser éste filipino. En reacción a ese prejuicio racial argumentó el clero en contra de la inferioridad del indio. Más que un movimiento de emancipación, la protesta del clero nativo fue primero una tentativa de defensa de sus intereses y de su dignidad. Lo que venía a poner en dudas la superioridad del regular, luego la del *castila* y de allí inevitablemente la legitimidad de su dominio. El padre Pedro Peláez, y más tarde el padre José Burgos, mestizos ambos, ambos con brillantes estudios y cargos importantes ²⁹ se hicieron los portavoces del clero secular ante las autoridades eclesiásticas y civiles, que tardaron en comprender las consecuencias que implicaba la injusticia sufrida por los sacerdotes nativos. De una reivindicación de igual dignidad se pasó progresivamente a un cuestionamiento de la superioridad de los españoles y de la legitimidad de su presencia. Los Gobernadores Generales coincidían en señalar la desconfianza que les inspiraba el clero filipino y su presencia en todos los grupos sospechosos o más o menos subversivos. Una tardía toma de consciencia, por parte de las autoridades, de la situación injusta reservada al clero nativo y de sus posibles consecuencias políticas, no desembocó en ninguna medida decisiva, por el recelo que se experimentaba ante la perspectiva de poner a la feligresía entre manos de unos hombres de cuyos sentimientos antiespañoles se sospechaba en muchos casos.

Al descontento de los clérigos vino a agregarse el de una nueva casta de intelectuales, hijos de la incipiente burguesía y cuya situación económica había permitido el acceso a niveles superiores de enseñanza. Estos tampoco encontraban salida satisfactoria a sus aspiraciones. El movimiento, conocido como “La Propaganda” reunió a los más motivados y emprendió, desde la Península donde la libertad de prensa era mayor, una campaña a favor de las reformas que reclamaban para Filipinas. Aunque, en un principio, no se declaró independentista y sólo reclamó abiertamente la expulsión de las órdenes religiosas - responsables, en su concepto, de todos los males del país - e igual tratamiento para españoles y filipinos, sus escritos, introducidos clandestinamente y ampliamente difundidos tuvieron una influencia indudable en la toma de conciencia nacionalista. Entre ellos, las novelas de José Rizal, “Noli me Tangere” y “El filibusterismo” y el periodico *La Solidaridad*, expresión de las ideas del movimiento, publicado en España, donde no imperaba la misma censura que en Filipinas, de 1889 a 1895. La apertura del Canal de Suez, en 1869, facilitó los contactos con la metrópoli, la navegación a vapor ponía ya a Manila a un mes de Barcelona y, cuando en siglos anteriores las noticias de España podían tardar dos años en llegar, el telégrafo permitía transmitir las en pocas horas. Los hijos de la burguesía viajaban a Europa, donde algunos cursaban estudios y nuevas ideas liberales circulaban en Filipinas, favorecidas por la masonería que atraía a numerosos filipinos. Esta reservó por lo demás muy favorable acogida en la Península a los jóvenes de la Propaganda, prestándoles su apoyo. Estos hijos de la burguesía filipina parecían más atraídos por la vía de las reformas que por la senda revolucionaria. Los escasos resultados de las pesquisas llevadas a cabo en 1892 en casa de los principales simpatizantes de la causa autonomista, por orden del Gobernador General Despujol, parecen confirmar que, poco antes de estallar la revolución, la burguesía y los intelectuales filipinos esperaban todavía la introducción de las reformas que hubiesen llevado a su país en la vía del progreso y hubieran igualado a filipinos y españoles. Sin duda, la finalidad a largo plazo, no podía ser sino la independencia, pero aún no parecían dispuestos a arrancar por las armas lo que tardaban en conseguir por la ley; al menos, no había llegado el momento. Y Rizal se negó, en 1896, a encabezar la insurrección, como se lo propusieron con insistencia. La acción violenta, la iba a desencadenar el Katipunan, en que había entrado masivamente gente del pueblo, aunque todas las categorías sociales estaban representadas. El proyecto de la burguesía se concebía a más largo plazo. También tenía más que perder en la situación caótica de un período de disturbios. Al fusilar, en 1896, al doctor José Rizal, cuyos enfoques moderados y cuyo innegable prestigio entre las masas le destinaban a ser un inelocutor privilegiado en un período de crisis, los españoles se granjearon la definitiva hostilidad de la burguesía y proporcionaron a la revolución un mártir, que se iba a convertir en figura mítica de su causa.

El control del movimiento escapaba temporalmente a la burguesía, tomando ya la iniciativa el Katipunán, que, hasta cierto punto, adoptó el modelo de las logias masónicas, aunque su finalidad era muy diferente. Esta sociedad secreta se orientaba esencialmente a la preparación de la lucha por la independencia. Su base era más popular³⁰ y los métodos preconizados más directos: de los debates reformistas de los intelectuales se pasaba a la lucha armada. De la hostilidad a los religiosos se había pasado a la hostilidad a los españoles. Ya no se daban protestas de fidelidad a España, se preparaba el asesinato de los *castillos*.

A finales de siglo, haciéndose más sensible la presión fiscal, se manifestó cierto descontento en la población. La imposibilidad de controlar eficazmente los abusos cometidos en los pueblos aumentaba el malestar. La función de Cabeza de Barangay, más difícil de desempeñar, se hacía poco apetecible y atraía a individuos de dudosa calidad. El prestigio del *castila* y de los religiosos iba decayendo. No se tenía en el reclutamiento de los funcionarios suficientes exigencias, y la influencia de los religiosos, blanco de todos los ataques, había mermado. Estalló la revolución en 1896, y en menos de dos años acabó con la presencia española en Filipinas.³¹

La hostidad del pueblo filipino se había manifestado primero contra los religiosos. La campaña contra los regulares, iniciada entre el clero filipino, se había visto reforzada por la corriente anticlerical muy difundida en Europa. Si las órdenes religiosas habían favorecido el mantenimiento de la soberanía española en Filipinas durante más de tres siglos, con medios mínimos, fueron en gran parte responsables de la desesperanza del clero filipino. Su hostilidad a la evolución de las ideas y a una mayor libertad de expresión les granjeó también la hostilidad de la mayoría de los intelectuales. Los violentos ataques contra las religiosos contribuyeron a su pérdida de prestigio y de influencia en las masas, aunque su papel en la enseñanza y las parroquias y la riqueza de sus haciendas, hacían que siguieran constituyendo uno de los poderes más sólidos de las islas.

Si no deja de sorprender una emancipación conseguida en tan pocos años de lucha, después de más de tres siglos de soberanía española, parece inevitable que se produjera en el siglo XIX un movimiento hacia la independencia. Quizá se hubiese podido verificar en otras condiciones y en diferente plazo, de haberse actuado de otra manera, pero es difícil imaginar que se pudiese haber prolongado mucho el *status quo*.

Podemos suponer que el ejemplo de la prosperidad en las colonias inglesas vecinas pudo incitar a la burguesía filipina a pensar que el desarrollo de su país, sobre todo cuando la libertad de comercio fue abriendo nuevas perspectivas, pasaba por otra vía que el inmovilismo del Archipiélago en materia económica. Pero sobre todo, los aspectos específicos de esa colonia siendo una ausencia casi total del colonizador, tanto en el escaso número de residentes, como en el plano comercial, donde imperaban los extranjeros,³² una gran distancia de la metrópoli, la existencia de un núcleo cada vez más importante de población indígena con formaciones de nivel superior, el movimiento de emancipación se hacía inevitable. Sólo hubiesen podido frenarlo una verdadera potencia militar en el Archipiélago o un interés económico de la población en prolongar su dependencia. No era el caso.

NOTAS

- ¹ AHN Ultramar, leg. 5152
- ² AHN, Ultramar, leg.5152
- ³ Pierre de la GIRONIERE, *Aventures d'un gentilhomme breton aux Philippines*, Paris, 1855, p. 71. De la Gironière file testigo directo de los distitbios de 1820 y del motín de Novalés.
- ⁴ id.,p.72
- ⁵ AHN, Ultramar, leg. 2308
- ⁶ id.
- ⁷ Considerada como herética la nueva cofradía, sus cabecillas y miembros fueron deportados en 1871.
- ⁸ Una carta de la Audiencia de Manila, en Noviembre de 1842, refiere que las prácticas de la Cofradía se alejaban de la estricta ortodoxia. Apolinario, que entonces tenía 26 años, es descrito como ignorante y fanático. Nuevo pontifíeé parecía aprovecharse de la credulidad de sus seguidores para enriquecerse:
de base a la insurrección que en la indicada provincia estalló en 1841 y cuyo objeto era la celebración de autos simbólicos y supercherías por los principales agentes de la asociación que se sieponian representantes de la Virgen y de los Santos, con elfin de recaudar semanalmente las sumas que los cofrades satisfacían en pago de rezos, amuletos y milagros, siendo de advertir que los Pontífices o sacerdotes de esta nueva religión autorizaban enfre sus prosélitos matrimonios que decían tres veces santos por venficarse en presencia de tres que se suponían representantes de la corte celestial.” (AHN, Ultramar, leg. 2308).
- ⁹ AHN, Ultramar 5152
- ¹⁰ AHN, Ultramar 06833/2
- ¹¹ “Un anciano de 85 años
- ¹² Doctor en teología y en derecho canónico, párroco del Sagrario en Manila, era tambien canánigo de la Catedral de Manila
- ¹³ Cuyas minutas auténticas desaparecieron.
- ¹⁴ El problema más constante de orden público con el que se veían enfrentadas las autoridades españolas era el de los *tulisanes* o salteadores de caminos que perturbaban la vida de los carupos, pero no solían atentar a la vida humana. Atacaban a los viajeros o a los pueblos, a veces con cierta complicidad por parte de las autoridades indígenas. En 1867, Ramón Blanco, encargado de estudiar en varias provincias la mejor manera de establecer en ellas la Guardia Civil, informaba al Gobernador General (AHN, Ultramar, 5329/1, expte 4: Carta de Ramón Blanco al Gobernador General, 30.6.1867) de que los destacamentos del ejército encargados hasta entonces de perseguir a los bandidos obtenían escasos resultados, al carecer de apoyo por parte de la población y de algunas autoridades. Por una parte, en dichas expediciones, solían darse conflictos de autoridad entre civiles y militares, y por otra el comportamiento del ejército, cuya propensión natural a abusar de su fuerza en los pueblos se manifestaba con harta frecuencia, 100 hacia repulsivo a los habitantes. Para cubrir las necesidades de alcjamiento y abastecimiento de su trópa, 1005 oficiales españoles se limitaban a dar órdenes, desentendiéndose lúego de cómo las iban cumpliendo sus subordinados, los cuales emprendían a veces un auténtico saqueo del pueblo. Los vejámenes a las autoridades indígenas eran corrientes y el comportamiento del ejército le granjeaba a veces la hostilidad hasta del párroco. El frecuente relevo de los oficiales, dándose las más veces en el momento en que éstos empezaban a conocer realmente el terreno, dificultaba aún la eficacia de su tarea. Del informe de laamón Blanco resalta que la seguridad no parecía seriamente amenazada por la existencia de algunas cuadrillas de ladrones, pero silo era la serenidad de los pueblos por la repetición de pequeños robos de los que los campesinos eran victimas, y que repercutían en su trabajo. El problema consistía en encontrar una forma más adaptada de fuerza pública, ya que el ejército creaba más problemas de los que venía solucionando. En plena revolución, los españoles seguían tratando diferentemente el problema de los insurrectos y el de los tulisanes. Así el acuerdo de Biac rla bato, firmado por Paterno y Primo de Rivera el 14 de diciembre

de 1897 no confundía a unos con otros. Se acordó que, recobrada la paz, se cantaría un *Te Deum* “sin que sea obstáculo para ello la existencia de partidas de tulisanes.” (AM, leg. 36/4)

- ¹⁵ AHN, leg. 5152, Carta reservada del Gobernador General Carlos Maria de la Torre al Ministro de Ultramar (18.1.1870)
- ¹⁶ AHN, Ultramar, leg. 5254/2, expte 16
- ¹⁷ AHN, Ultramar leg. 5242
- ¹⁸ Los Gobernadores consultados
- ¹⁹ Informe del Gobernador General Despujol. Id.
- ²⁰ En Julio de 1892, Rizal fue desterrado a Dapitan, donde había de residir hasta el principio de la insurrección, negándose entonces a encabezarla, a pesar de las repetidas ofertas que se le hicieron, y embarcándose para Cuba donde pensaba ejercer de médico en el ejército español. Arrestado y sentenciado de muerte, fue ejecutado en Manila el 30 de diciembre de 1896.
- ²¹ Jules GREINDL, “*A la recherche d’un état indépendant. Léopold II et les Philippines (1869-1875)*”, mémoire présenté a la seance du 15.2.1960, Bruxelles, Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer.
- ²² Pierre de la GIRONIERE, op. cit.
- ²³ 3.507.277, según el censo.
- ²⁴ El archipiélago contaba 7.832.719 habitantes, según un estudio realizado a finales de 1894, citado por la Guía Oficial de Filipinas de 1898. A principios del decenio, residían en el país unos 14.000 españoles y unos 8.000 españoles filipinos (“Filipinas, problema fundamental...”, Madrid, imp. de don Luís Aguado, 1891).
- ²⁵ Rafael Díaz Arenas “Memorias históricas y estadísticas de Filipinas”, Manila, 1850, 5 cuaderno.
- ²⁶ Arzobispo de 1767 a 1789.
- ²⁷ El 16,33% exactamente
- ²⁸ Expulsados en 1768, fueron autorizados a regresar en 1851.
- ²⁹ De padre español y madre filipina, el padre Pedro Peláez se dio a conocer en la defensa del clero nativo cuando, en 1862, dirigió al Gobernador General una carta en la que reclamaba la abrogación del decreto por el que se organizaba el nuevo reparto de curatos en detrimento de los seglares, después del regreso de los jesuitas a Filipinas. Doctor en teología, era profesor de la Universidad de Santo Tomás y a la muerte del Arzobispo de Manila, monseñor José Aranguren en 1862, fue elegido Gobernador eclesiástico.
- Defendió ardientemente la causa del clero nativo, hasta su muerte en circunstancias trágicas, bajo los escombros de la catedral de Manila, durante el terremoto de 1863. Había de continuar su obra el padre José Burgos, que fue su alumno.
- ³⁰ Andrés Bonifacio, antiguo obrero y empleado de comercio, jefe del *Kafipnann* a partir de diciembre de 1893, era un hombre del pueblo, cuyos estudios no pasaron de la enseñanza primaria. Después de la muerte de Bonifacio, la burguesía volvería, con Aguinaldo, a controlar el movimiento de emancipación.
- ³¹ Los primeros combates tuvieron lugar el 25 de agosto de 1896. El 15 de noviembre, el Gobernador General Primo de Rivera y Alejandro Paterno, que hacía de intermediario entre los españoles y las tropas de Aguinaldo firmaban un acuerdo según el cual, contra la cantidad de 400.000 pesos pagada por los españoles, se comprometían los insurrectos a depositar las armas, marchando para el exilio sus principales jefes. Asilo hicieron el 24 de diciembre de 1897 embarcándose para Hong-Kong. Poco iba a durar la paz de Biac na bato. A favor de la guerra entre Estados Unidos y España, volvería la agitación armada. El 13 de agosto de 1898, Manila se rendía a los americanos. Estos se verían a su vez entretidos durante tres años a la guerrilla filipina, que seguía reivindicando la independencia prometida pero no concedida por los Estados Unidos.
- ³² La atracción económica ejercida por Cuba sobre los españoles era más importante y pocos invertían en Filipinas. “No hay intereses españoles permanentes; salvo media docena de personas, ningún español tiene nada que signifique propiedad, industria o comercio.” PR 12.840/1, Carta del Gobernador Civil de la provincia de Manila, 1.11.1897.